

Ciudad y democracia

ENTREVISTA A JORDI BORJA

<http://www.noucycle.org/NCarticles/1627.html>

Normalmente se ha asociado la libertad, la creatividad, la alteración de costumbres tradicionales, la resistencia a poderes despóticos, a las ciudades y a sus habitantes. ¿Crees que las ciudades siguen siendo un espacio de libertad, de participación y de resistencia a poderes injustos? De hecho, muchos de sus nuevos habitantes no viven propiamente en la ciudad sino en sus suburbios y en condiciones extremas. Pienso en Ciudad México, en Bombay, en Caracas, en París y en otros muchos lugares.

En las ciudades encontramos lo peor y lo mejor que ha producido la humanidad. Es tan cierto el discurso épico positivo sobre la ciudad global como el de las ciudades miseria. Pero los que disfrutan de la primera y los que mal sobreviven en la segunda no viven en la misma ciudad, aunque se encuentren a pocos centenares de metros de distancia. Siempre han existido estas dos ciudades. La imagen que a veces se quiere transmitir de una ciudad ideal que supuestamente existió en el pasado es un mito grosero. Algunos textos del Ajuntament de Barcelona lamentan que ya no estemos en la “sociedad homogénea y tradicional”. ¡Cómo si alguna vez hubiera existido! Así se afirma en la exposición de motivos de la lamentable “ordenanza del civismo” y el mismo argumento se encuentra en algunas declaraciones del anterior alcalde [Joan Clos, actual Ministro de Industria del Gobierno Zapatero] (véase por ejemplo su artículo en el monográfico sobre Civismo de la revista Barcelona metrópolis mediterránea, 2005). Hay muchas situaciones intermedias pero hay unos que viven en la primera ciudad y otros, muchos más, en la segunda. Aunque el bienestar de los primeros debe mucho al malestar de los segundos. Pero hay algo nuevo en la ciudad actual, hoy se puede hablar de una revolución urbana.

¿En qué sentido? ¿A qué tipo de revolución te refieres?

De entrada a un cambio de escala. Una gran parte de la humanidad, la gran mayoría en Europa o en América, vivimos en regiones intensamente urbanizadas, donde la distinción campo-ciudad pierde sentido. Vivimos en regiones metropolitanas o ciudades de ciudades, discontinuas, de geometría variable. En ellas encontramos grandes y pequeños municipios, zonas densas y otras difusas, centros potentes y urbanizaciones cerradas, enclaves globalizados y barrios marginales, áreas en transformación y suelos expectantes. Esta revolución urbana se vincula a un discurso optimista, está llena de promesas: multiplicidad de las ofertas de trabajo, de cultura, de relaciones sociales; compatibilidad de la vida urbana con la naturaleza; nueva economía limpia vinculada a la ciudad del conocimiento; e.gobernabilidad democrática [1], con su promesa de transparencia y participación generalizada. Esta revolución urbana obviamente no es un simple fenómeno geográfico. Éste es la expresión física de un cambio de los sistemas de producción e intercambio y de las relaciones sociales: la revolución informacional y las fracturas sociales que conlleva, la economía del conocimiento y su otra cara, la de los servicios precarios y el desempleo, la diversidad social, la exaltación de la autonomía del individuo y también las migraciones y la

exclusión. Una revolución que en esta etapa inicial genera más desarraigos anómicos que alternativas políticas. Políticamente se traduce en tendencias autoritarias basadas en fundamentalismos y en miedos, desde Bush hasta la represión preventiva practicada en las ciudades, incluida Barcelona.

Pero lo que has descrito, más que una revolución urbana, parece una contrarrevolución.

Efectivamente. Más que una revolución parece una contrarrevolución. Incluso en el “primer mundo” aumenta la desigualdad social y la vida de los sectores medios se hace más incierta. La nueva escala territorial multiplica los efectos negativos de la segregación social y el juego perverso del mercado, los miedos y el afán de distinción de cada grupo respecto a los percibidos como inferiores tiende a tribalizar y a privatizar el espacio urbano. El capital global destruye el capital fijo y social acumulado, se debilitan las políticas sociales locales y la precarización fragmenta la fuerza de trabajo. La crisis del espacio público es a la vez un hecho urbanístico (físico), social y político. En estos nuevos territorios urbanos la gobernabilidad deviene confusa, opaca y tecnocrática, propiciatoria para los actores económicos privados (propietarios, promotores, constructores) y facilitadora de la corrupción. El conflicto social (la lucha de clases) se hace territorial pero desestructurado, asimétrico, tan disperso como la realidad de los nuevos espacios urbanos. A veces se expresa mediante la violencia, la informalidad, el rechazo de las instituciones y de la política. Y así alimenta los miedos de los sectores más aposentados. Otras veces se hace reivindicativo, organizado incluso, pero no siempre los intereses, los valores y las emociones que lo motivan son conciliables con intereses o valores generales. Pueden expresar localismo privilegiado, insolidaridad o xenofobia. Como el “aquí no”. O como dice la ordenanza citada: el derecho a no ver lo que no gusta.

Las actuales ciudades, las grandes ciudades sobre todo, son más bien aglomeraciones urbanas donde conviven personas de muy diferentes orígenes geográficos. Esta situación puede crear en ocasiones problemas de comunicación entre los ciudadanos. ¿Cómo crees que puede conseguirse una buena relación entre personas tan diversas en su lengua, cultura, costumbres o creencias? ¿Estás a favor del multiculturalismo?

El futuro de la ciudad y de la democracia se encuentra en las periferias. En las ciudades centrales, densas, compactas, en las que se mantiene una cierta diversidad, la realidad multicultural es más visible pero también más fácil de gestionar y de convivir. Hay intereses comunes puesto que todos los que comparten el espacio de esta ciudad se necesitan, unos trabajan para otros, están cerca unos de otros, se ven, se reconocen, intercambian. Aquí la conflictividad puede simetrizarse, los colectivos socio-étnicos pueden concentrarse y cohesionarse en un área territorial que les hará más fuertes y también con más capacidad de integrarse en la sociedad urbana y de expresar y negociar sus derechos.

En las periferias es otra cosa. La segregación social con frecuencia va unida a distintas formas de exclusión, precariedad en el trabajo, rechazo socio-cultural, miedos mutuos entre colectivos que no se conocen. La explosión de las “banlieus” francesas a finales de 2005 fue un grito de exigencia de visibilidad, de reconocimiento por parte de los “otros”, las instituciones, la “opinión pública”, los ciudadanos plenos, los de la primera ciudad.

Estas periferias, cuando están ocupadas por sectores pobres, inmigrantes, marginales, son vistas como “la horda” (recordemos la novela de Blasco Ibáñez [2]), como las “clases peligrosas” (como cuenta Louis Chevalier [3] que se percibía a los trabajadores hace un siglo). En ellas se adivina la potencial rebelión social, de tanto en tanto aparece la violencia gratuita, pero en muchos casos se las criminaliza injustamente puesto que la delincuencia acostumbra a reducirse a un sector muy minoritario de la población.

Pero hay otras periferias más peligrosas, las de las casas ajardinadas o adosadas ad infinitum, las de los “barrios cerrados”, las de los municipios más exclusivos y excluyentes. Aquí los miedos y los prejuicios unidos al afán de mantener sus posiciones de privilegios, grandes o pequeños, en un marco de gobernabilidad débil y escasamente democrática puede conducir a la emergencia de un fascismo civil que sea la base de apoyo de un autoritarismo urbano (como el que representa Sarkozy en Francia) que consolide una realidad política urbana de castas.

¿Cómo puede surgir entonces la ciudad democrática del siglo XXI? Mike Davis mantiene que los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico por excelencia, que incluso el Pentágono tiene su punto de mira en ellas.

La ciudad democrática del siglo XXI se construirá desde las periferias. Con ello no queremos decir que el papel de las ciudades centrales sea irrelevante, puesto que en ellas viven los sectores sociales e intelectuales más estructurados que pueden contribuir a elaborar un proyecto de ciudad metropolitana. Sin embargo, el escenario de construcción de esta ciudad será principalmente las periferias populares, sus gentes, sus representantes locales a veces, sus luchas sociales y sus propuestas. Hoy nos fijamos solamente en las expresiones primarias de violencia. Es posible incluso que surjan “senderos luminosos” que lleven la violencia a niveles más altos que los que ahora conocemos. Pero es aún más probable que en las periferias, en algunas de ellas, se desarrollen prácticas positivas de integración interna y externa, de participación en proyectos políticos metropolitanos. Son los que más los necesitan. A veces la periferia teme el poder de la ciudad central, una respuesta asimétrica al miedo del centro respecto a las periferias populares. La respuesta no es encerrarse en su ghetto sino conquistar una cuota de poder en el territorio metropolitano.

En Barcelona, por ejemplo, es necesario un gobierno metropolitano democrático, elegido directamente. La influencia de la periferia sería determinante puesto que, fuera cual fuera la definición del territorio, la población metropolitana igualaría por lo menos a la de la ciudad central (algo más de un millón y medio de habitantes cada una si tomamos los límites de la antigua Corporación metropolitana) y, si se eligiese el ámbito de la región, entonces ésta duplicaría a la ciudad central. En este caso, especialmente, debería crearse un organismo conjunto entre Ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya.

¿Crees que es posible una vía democrática real para el control ciudadano de las ciudades? Si crees que es posible, ¿qué medidas sugerirías? ¿Qué opinión te merecen experiencias de democracia participativa cómo las que se han dado en Porto Alegre y en otras ciudades?

El ámbito local es el que facilita la innovación política, tanto en lo que se refiere a la representación (sistema electoral, control de los electos, etc) como a la democracia

directa (consultas vinculantes, autogestión de equipamientos o programas, etc). La democracia participativa supone la existencia de un espacio de relación entre instituciones de gobierno y ciudadanía (por medio de asociaciones, colectivos de facto, ciudadanos individuales, etc). No me parece que el mejor método sean los “consejos ciudadanos” definidos por sorteo u otro sistema aleatorio como propone ahora Segolène Royal (los nips de origen alemán, que también se han aplicado en algunos municipios del País Vasco y en Catalunya, por ejemplo en Rubí). En cualquier caso lo que importa es la materia sobre la que se debate y se negocia, el momento en el que se hace y la influencia que la ciudadanía tenga sobre la decisión o la gestión posterior.

El presupuesto participativo debiera ser “de obligado cumplimiento” en cualquier democracia. Pero tiene sus límites. La experiencia de Porto Alegre y otras ciudades latinoamericanas se ha demostrado eficaz en barrios populares, relativamente homogéneos y bastante organizados y ha contribuido mucho a establecer prioridades tanto de ciudad como en cada barrio y a conseguir un consenso activo, cooperador, de la población implicada. No creo que sea suficiente para debatir los proyectos urbanos pesados o las opciones de política económica o cultural para el conjunto de la ciudad. El planeamiento estratégico podría ser también un instrumento interesante a este nivel mayor pero en muchos casos ha sido superestructural y retórico aunque siempre contribuye a crear un ambiente favorable al debate ciudadano que en general ha sido poco aprovechado por las organizaciones populares y por los sectores intelectuales críticos.

¿De dónde crees que pueden surgir las energías necesarias para renovación política en este ámbito?

La respuesta política a las dinámicas metropolitanas y a los efectos perversos de la revolución urbana requiere una innovación política mucho más radical que difícilmente nacerá del actual ámbito institucional y de su clase política, con intereses muy cortoplacistas y partidarios de mantener la fragmentación política y la democracia reducida a las elecciones y al clientelismo. Solamente la suma de la presión social y de la elaboración intelectual conseguirá que algunos sectores del sistema político formal asuman propuestas innovadoras. Por ahora hay más revolución urbana que revolucionarios y, por lo tanto, dominan los efectos perversos de la primera.

Un fenómeno que preocupa a muchos sectores sociales, y de manera creciente, es el precio de la vivienda en las grandes o medianas ciudades y en sus alrededores. ¿Cree que los poderes públicos pueden hacer algo en este ámbito? ¿Qué medidas podrían tomar a favor de los sectores más desfavorecidos?

La vivienda es seguramente el mejor ejemplo de las contradicciones del actual desarrollo urbano y de la impotencia y de la complicidad de las políticas públicas respecto a los actores privados que se benefician del mismo. En países como el nuestro la industria de la construcción tiene capacidad de construir tantas viviendas como sean necesarias y las infraestructuras y los medios de comunicación permiten todo tipo de formas de crecimiento, compacto o no. Incluso existe un nivel de solvencia suficiente en el 85% de las familias para cubrir los costes de la construcción y una tasa de beneficio razonable (es decir, similar a otros sectores de la economía) para promotores y constructores. Existen, pues, las condiciones para que la gran mayoría pueda acceder a una vivienda, como puede acceder a un auto por ejemplo. Y sin embargo la vivienda

es hoy un reclamo general, no solo del 15% que requiere vivienda pública social. Se construyen viviendas, pero una parte importante van destinadas a segunda residencia, al turismo, o simplemente es ahorro especulativo en piedra. Las viviendas protegidas en cambio alcanzan aproximadamente a un 10% de la demanda, lo mismo que las “sociales”. Y lo que es peor se utiliza la política de infraestructuras para facilitar la urbanización extensiva, crear expectativas especulativas y posibilitar promociones de vivienda alejadas de los tejidos urbanos equipados. Es decir, que la población demandante de rentas medias o bajas parece destinada a vivir en esta tierra de nadie, ni campo ni ciudad, de las periferias difusas, suponiendo que lo puedan pagar y que puedan luego asumir los costes y los tiempos del transporte.

¿Y qué opinión le merece el movimiento oKupa? ¿Son tan incívicos, como a menudo se afirma desde instancias públicas, los miembros de este colectivo?

Evidentemente los jóvenes, los inmigrantes y aquéllos que no poseen ahorro o patrimonio y, más en general, las personas con bajos ingresos tienden a ser expulsados de la ciudad. El movimiento okupa, que en general expresa motivaciones políticas, es una forma primaria, en el sentido de inicial, de rebelión contra esta situación. Y además plantea una crítica interesante a la ciudad que se está haciendo: se debilitan los espacios públicos y se despilfarran espacios construidos vacíos. Al ocupar estos edificios no utilizados, no sólo reclama vivienda, también les da muchas veces un uso social, cultural, con lo que la referencia a la Constitución es doble: recuerda el derecho a la vivienda para todos y establece la función social de la propiedad.

Sobre estas bases hay incluso sentencias judiciales que exculpan a los okupas. Una vez más la consellera de Justicia [Montserrat Tura] ha hablado demasiado cuando declara que no hay okupas buenos y malos, que todos son perseguibles por la ley.

Los gobiernos -pienso en el británico, por ejemplo- están tomando cada vez más medidas de control y de vigilancia. Sostienen que el anonimato de la gran urbe posibilita el terrorismo y la lucha antisistema. ¿Esas medidas no pueden acotar en exceso la libertad ciudadana? ¿No se está cayendo en la histeria de la seguridad post 11-S?

El miedo es hoy uno de los motores de las dinámicas urbanas. Es un miedo en parte generado por las condiciones de vida actuales, las incertidumbres sobre el estado del mundo que hoy vivimos en tiempo real, sobre el temor a lo desconocido que se nos hace tan presente, es la angustia derivada de lo precario del trabajo, lo incierto del futuro, es el desarraigo de vivir en zonas urbanas sin cohesión ni identidad, sin límites y sin historia. El miedo va mucho más allá de la delincuencia urbana o del eventual malestar de la proximidad de los colectivos inmigrantes. Es un miedo manipulado por gobernantes mundiales como Bush que nos presentan un mundo, el nuestro, acechado por enemigos irracionales, crueles y casi invisibles, a los que se identifica con países, con “razas”, con religiones, y que de hecho estimulan la acción violenta de minorías desesperadas o fanáticas. Es un miedo agresivo que se apoya en tres fundamentalismos, el patriótico, el religioso y el económico: el capitalismo puro y duro naturalizado como única economía posible y compatible con la democracia. Y es un miedo que luego se traslada al ámbito local, por parte de ideólogos y políticos conservadores, medios de comunicación sensacionalistas e incluso gobiernos locales democráticos.

Como es el caso de Barcelona, con la ordenanza sobre el civismo.

Sobre esto último quería preguntarte. Tú has trabajado muchos años en el ayuntamiento de Barcelona, ¿qué opinión te merece el decreto de urbanismo aprobado por el consistorio, que como sabes está formado por una mayoría de izquierdas (PSC, ERC, ICV-EUiA)?

La ordenanza de Barcelona, que ya hemos citado anteriormente, se dirige a los ciudadanos aposentados y les dice que les va a proteger de todo aquello que les pueda incomodar, y cómo la legislación existente ya define y sanciona una gran diversidad de conductas (la pequeña delincuencia urbana, el deterioro del mobiliario urbano, los ruidos molestos, etc) define el derecho a “no estar inmerso en un escenario visual no deseado”. A partir de aquí se establece una amalgama de comportamientos sancionables muy heterogéneos pero que tienen algo en común: sirven para “criminalizar” a colectivos sociales muy determinados: pobres, jóvenes, inmigrantes, prostitutas... La lista parece absurda y las sanciones también: patinadores y grafiteros, los que beben en la calle y los top manta, los que aparentan negociar el precio de un servicio sexual y los que colocan pancartas, los mendigos y los que duermen en un banco, etc, etc. A todos ellos se les imponen multas que casi ninguno podrá pagar. De hecho, el 90% de las denuncias no tiene consecuencias prácticas. Pero lo más grave no es el ridículo de estas ordenanzas sino su objetivo, su intención política, su sustrato ideológico: se declara a una parte de los ciudadanos como no deseables, los inmigrantes buenos serán los que denuncien a otros inmigrantes, los pobres que se vayan a otra parte y los jóvenes que se queden en casa.

Es un populismo reaccionario que parece increíble que se haya aprobado en Barcelona. Un mal signo de los tiempos.

Pero, entonces, en tu opinión, ¿no hay diferencias entre un gobierno municipal de izquierdas y uno de derechas?

Los gobiernos municipales y autonómicos que denominamos de izquierda no creo que tengan un proyecto de transformación de la sociedad que se traduzca en su práctica pero sí que por los valores básicos que los legitiman, por sus intereses electorales y a veces por sensibilidad hacia los sectores populares han practicado políticas que en algunos aspectos pueden considerarse progresistas como la importancia del espacio público, los programas sociales y culturales, la acción rehabilitadora en los barrios más deficitarios, las experiencias participativas, etc. En urbanismo creo que en los últimos años el pensamiento y la acción de estos gobiernos se ha debilitado, y en vivienda lo ha sido casi siempre con excepciones como el proyecto de ley de derecho a la vivienda y el plan de barrios, iniciativas del gobierno de la Generalitat. Pero en líneas generales predomina la hegemonía de los actores privados y los modelos de desarrollo urbano más próximos de un capitalismo desenfundado que de una política socialdemócrata. Y en algunos casos la izquierda institucional ha adoptado, con escasos matices diferenciadores, el discurso de la derecha en seguridad, inmigración, procesos de toma de decisión, sumisión a los promotores inmobiliarios, etc.

¿Por qué crees que los casos de corrupción urbanística se han multiplicado tanto en estos últimos años?

La corrupción es un paradigma de estos modelos. Es evidente que hay corrupción

porque hay corruptos y corruptores y que son delincuentes ambos. Pero también hay un sistema perverso que lo facilita, lo estimula. Un cambio de calificación del uso del suelo puede multiplicar su valor por 1.000 o más. Los propietarios del suelo o los promotores solamente deben entregar al municipio el 10% del suelo, o su valor, para destinarlo a vivienda social. Las plusvalías urbanas solamente en una mínima parte revierten al sector público. En el proyecto de ley del suelo del actual gobierno español se establece que será el 15%. Debería ser al revés, el 80 o el 90% de una valorización debida al desarrollo urbano en su conjunto y a la decisión política debería revertir al sector público.

Es un sistema perverso que parece destinado a favorecer la especulación y la corrupción, tanto de los actores económicos como de los políticos.

¿Cómo concibes una ciudad ideal, más justa, más armoniosa, o, si me permites el uso del término, cómo piensas la ciudad socialista del futuro?

Creo que hay una crisis político-cultural del urbanismo. Es una disciplina que nació orientada por valores de transformación social, orientada incluso por utopías urbanas. Cerdà planteó un proyecto de ciudad que se ha llamado de “ciudad igualitaria” y Arturo Soria propuso un modelo de “ciudad lineal” que se proponía compatibilizar lo que hoy se proclama pero no se hace: la integración social, la vivienda, la actividad económica, el transporte y calidad de vida. Ahora los discursos sobre la sostenibilidad, la mezcla social, la competitividad y la gobernabilidad nos parecen retóricos puesto que en las ciudades aumenta la desigualdad, son cada día más insostenibles y la gestión política aparece más opaca y más vinculada a intereses particulares.

El desafío quizás más importante es reconstruir el discurso ético o moral sobre la ciudad futura, la ciudad deseada.

NOTAS: [1] Borja ironiza con este término, por él acuñado, sobre la tendencia de algunas instituciones a reducir la transparencia y la participación políticas a la apertura de diversos canales que permitan el envío de correos electrónicos o a la existencia de foros ciudadanos, sin que ello implique reducir a cero el valor participativo de esos procedimientos. [2] El mismo Blasco Ibáñez comentó. “Ninguna de mis obras tiene una base tan amplia en la realidad. No existe un solo personaje en La horda, ni aún los más secundarios, sin su correspondiente hermano de carne y hueso. Ninguna tampoco de mis novelas fue precedida de una preparación tan minuciosa. Durante un año examiné las diversas agrupaciones acampadas en torno a Madrid, con una observación sin objeto, por puro recreo de paseante, y sólo pasado ese tiempo se me ocurrió la idea de escribir La horda.” [3] Borja se refiere a *Classes laborieuses et classes dangereuses*, à Paris, pendant la première moitié du XIX e siècle, que ha sido considerada una obra maestra por la crítica. Louis Chevalier nació en 1911 y falleció en 2001.